



H. Cámara de Diputados de la Nación

Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Proyecto de ley

Por un plan de emergencia para producir millones de vacunas que combatan el Covid 19 rechazando las patentes médicas y el negocio capitalista de laboratorios y farmacéuticas.

Art. 1: Declárase la prioridad sanitaria para el combate de la pandemia del Covid 19 poniendo los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura necesarios para lograr la producción a gran escala de las vacunas requeridas para la inmunización de la población.

Art. 2: El Poder Ejecutivo Nacional debe implementar todas las acciones económicas, comerciales y de cualquier otra índole para tal fin, empezando por desconocer las patentes médicas que rigen para las vacunas y medicamentos para combatir la pandemia, quedando facultado por esta ley para intervenir laboratorios y empresas farmacéuticas extranjeras y del país, a fin de contar con todos los insumos y tecnología necesarios.

Art. 3: El plan de producción, distribución y aplicación masiva de vacunas debe ser de manera gratuita y puesta a disposición inmediata para millones que lo necesitan, el cual debe ser controlado, administrado y gestionado por profesionales y trabajadores de la salud, científicos, académicos, epidemiólogos y demás profesionales, personalidades y organizaciones que apoyen.

Art 4: Destínese todos los fondos necesarios para solventar el presente proyecto comenzando por la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa y los que resulten de la implementación de un verdadero impuesto especial a las ganancias de bancos, multinacionales, laboratorios, oligarcas y grandes empresarios.

Art. 5: De Forma.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Fundamentos

La pandemia del Covid 19 sigue haciendo estragos en todo el mundo con millones de contagiados y muertos, mientras se anuncian nuevos rebrotes y oleadas. Ante esa escena catastrófica estamos asistiendo a otra, ya que es inconcebible, que a pesar del gran logro conquistado con la vacuna, un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios están privando a millones del derecho humano esencial a curarse al imposibilitar, merced a la existencia de las patentes, la producción a gran escala de la misma lo cual permitiría inmunizar y salvar millones de vidas. Dicho en otras palabras, el capitalismo generó esta pandemia y ahora es el mismo capitalismo imperialista que por su sed de ganancia y a pesar de que se descubrió la vacuna, impide la cura masiva.

Por eso saludamos la campaña que vienen impulsando distintas organizaciones como Médicos Sin Fronteras para que “no haya patentes médicas y que las vacunas, medicamentos y diagnósticos para el COVID-19 lleguen realmente a todas las personas del mundo”, reclamando que los gobiernos exijan “la exención de patentes de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas mientras dure la pandemia”, pronunciándose por el “No a las patentes de medicamentos, vacunas y diagnósticos durante la pandemia”.

Es sabido cómo actúan las multinacionales farmacéuticas y laboratorios. Pero los gobiernos capitalistas vienen cobijando y fomentando sus grandes ganancias, incluso haciendo contratos millonarios secretos y de “confidencialidad”. Estamos hablando de cifras siderales. Según distintas fuentes, Pfizer en 2019 obtuvo beneficios netos por 16.272 millones de dólares; AstraZeneca por 6.600 millones de dólares; Johnson y Johnson por 15.100 millones y Moderna pasó su cotización de mercado de 7.600 a 45.350 millones de dólares.

Los gobiernos han dispuesto miles de millones de dólares sacados de los presupuestos nacionales para subsidiar a las farmacéuticas para que desarrollen las vacunas, y están gastando miles de millones más para comprarlas. Pero han firmado con ellas acuerdos donde las compañías obtuvieron plazos de entrega flexibles, protección de patentes e inmunidad de ser responsabilizados si algo sale mal, blindándolas contra los sistemas judiciales nacionales como la reciente ley 27573 votada en Argentina por las variantes peronistas y la oposición patronal de Juntos por el Cambio, a pesar de la férrea oposición del Frente de Izquierda Unidad.

Los gobiernos imperialistas de Alemania, Francia o Italia denuncian los incumplimientos de entrega de la vacuna Pfizer, Moderna o AstraZeneca, pero pactaron contratos leoninos y secretos con ellas. Lo mismo hizo el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX, por su sigla en inglés), la alianza de más de 190 países que está comprando a las farmacéuticas 2.000 millones de dosis.

El acaparamiento por parte de los principales países es claramente repudiable. Según Amnesty International, los países que representan solo el 13% de la población mundial

retienen el 52% de las vacunas existentes. La Unión Europea encargó 2.300 millones de dosis cuando solo tiene 450 millones de habitantes. Canadá se ha asegurado suministros equivalentes a cinco veces su población. Israel, que se lo pone de ejemplo, ha pagado mucho más cara la vacuna a cambio de concesiones leoninas, privando de la vacuna al pueblo palestino.

El retraso en la producción de vacunas es un problema mundial del que participan todas las multinacionales farmacéuticas. El doctor Germán Velásquez, ex director del Programa de Acceso a Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, denuncia que “las patentes están destruyendo la campaña de vacunación”. Es que las vacunas se han desarrollado gracias a cuantiosos subsidios estatales pero, patentes mediante, las multinacionales se han adueñado de lo que en su origen es patrimonio de la humanidad. Es repudiable que gocen de un acceso libre a las investigaciones realizadas en laboratorios públicos o universitarios y ahora carezcan de la obligación de compartir sus propios resultados.

No es ninguna utopía luchar por lo que estamos planteando. En la historia hay muestras de movilizaciones y repudios a las patentes y abusos de las multinacionales. En 1922, por ejemplo, el Laboratorio Lilly intentó patentar la insulina pero tuvo que desistir ante la presión de médicos y la opinión pública. Durante la II Guerra Mundial, los inventores del procedimiento para la producción industrial de penicilina declinaron patentarlo por razones humanitarias. En 1997 el gobierno sudafricano en su necesidad de hacer frente al SIDA promulgó la *Medicines Act* que, pese a la frontal oposición de EE.UU., suspendía las patentes anti retrovirales. Brasil en 2001 desconoció la patente del medicamento Nelvinavir (Roche) contra ese mal. También en ese año, durante la llamada crisis del ántrax, EE.UU. y Canadá hicieron uso de la facultad de suspender la patente de la ciprofloxacina que poseía Bayer, produciéndolo masivamente como genérico.

La presión social provocó que la OMC (Organización Mundial de Comercio) emitiera la Declaración de Doha en 2001 -de la cual es firmante Argentina- que da carta de naturaleza al derecho de los países a activar licencias obligatorias para medicamentos esenciales dirigidos a luchar contra problemas de salud pública. Pero Estados Unidos y la Unión Europea están haciendo inviable la aplicación de este recurso, con la complicidad tanto de la OMC como de la OMS, organismos cómplices de las potencias imperialistas.

Luchar contra las patentes para vacunas y medicamentos que son patrimonio de la humanidad es tarea de la hora. Como fueron los casos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la penicilina, cuyos inventores Jonas Salk y Alexander Fleming no patentaron dichas vacunas.

Una coalición de 99 países liderada por India y Sudáfrica ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio que ceda los derechos de propiedad intelectual para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. Lo mismo vienen reclamando Médicos sin Fronteras, la reconocida ONG Oxfam, Amnesty International, Frontline Aids (Ayudas de primera línea) y Global Justice Now (Justicia global ahora). En estos días se pronunció en el mismo sentido la rectora de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil, entre muchas otras personalidades.

El gobierno argentino, firmante de esta declaración, debe impulsar y desconocer unilateralmente las patentes de vacunas y medicamentos, encarando la producción local para enfrentar la pandemia. El presidente Alberto Fernández dijo en Davos que la vacuna debe ser un “bien público global”. También lo hizo el presidente de Francia, Emmanuel Macrón, y el dictador chino Xi Jinping. Pero es un saludo a la bandera, porque no actúan en consecuencia, llamando a desconocer las patentes y obligando a sus empresas a que lo hagan.

En agosto de 2020, el gobierno peronista del Frente de Todos anunció la producción de la vacuna Oxford AstraZeneca, la cual iba a ser llevada a cabo por el multimillonario empresario kirchnerista Hugo Sigman, uno de los hombres más ricos de Argentina (Grupo Insud Pharma) en sociedad con el magnate mexicano Carlos Slim. Sigman se dedica a la industria farmacéutica y tiene plantas en Argentina y presencia en 40 países. Recientemente ha inaugurado la planta de Garín (Argentina) donde se realiza la producción del principio activo transferido por AstraZeneca. También el gobierno anunció la prueba en el país de la fase 3 para la vacuna Pfizer, a la que se presentaron 4.500 voluntarios en el Hospital Militar. ¡Pero la vacuna no aparece!

Precisamente, la coproducción de la vacuna entre Argentina y México demuestra que nuestro país puede dar un gran impulso al desarrollo de la producción de la vacuna, solo si usa esa producción en beneficio del país y no de AstraZeneca o empresarios como Slim.

La lucha por vacunas para todos y la liberación de las patentes está planteada como una necesidad urgente. El gobierno argentino debe impulsar la producción de millones de vacunas (compartidas en forma mancomunada con otros gobiernos y países) haciendo uso de toda la capacidad instalada en el país, obligando al Grupo Insud y al resto de los laboratorios y farmacéuticas a que pongan toda su tecnología, capacidad instalada y profesional, bajo apercibimiento de ser intervenidas y/o estatizadas.

Si el gobierno argentino junto a casi 100 países de la OMC suscribió la suspensión de las patentes durante la pandemia, ¿por qué no da el paso por desconocerlas y hace una campaña regional y mundial para que se logre en otros países? Es cierto que Estados Unidos y los principales Estados de la Unión Europea (entre ellos el gobierno supuestamente 'progresista' del PSOE y Podemos), Australia o Japón se oponen, pero hay que librar esa batalla.

Impulsamos un gran movimiento con pronunciamientos de científicos, profesionales de la salud, trabajadores y personalidades que quieren combatir la pandemia y acciones como las de las organizaciones que hoy se movilizan en Brasil para repudiar al gobierno de ese país por estar en contra de que se levanten las patentes, lo que permitiría que el inmunizador se produzca en su versión genérica.

Mientras damos esta pelea, señalamos que este proyecto de ley se enmarca en una salida global y de fondo que levanta la izquierda, por la abolición definitiva de todas las patentes y un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada poniéndolos bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores para terminar con el negocio capitalista de la salud y así poder garantizar al pueblo trabajador el disfrute de una salud pública, universal, gratuita y de excelencia.

Desde Izquierda Socialista y la UIT-CI (Unidad Internacional de trabajadoras y trabajadores-Cuarta Internacional) nos sumamos a todos aquellos que reclaman contra las patentes farmacéuticas, por vacunas gratuitas para todos y un plan de producción de emergencia mundial de las mismas con libertad de producción en cada país. El presente proyecto de ley va en ese sentido.

Juan Carlos Giordano

Diputado Nacional

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad